



VOL: AÑO 6, NUMERO 17

FECHA: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1991

TEMA: CAMBIOS CULTURALES

TITULO: **La cultura política del empresariado en México (un análisis del discurso) [*]**

AUTOR: *Rafael Montesinos Carrera [**]*

SECCION: Artículos

RESUMEN:

El aspecto más importante en la transición mexicana es la reconfiguración en la relación sociedad civil-Estado. En un contexto de inestabilidad política los diferentes actores sociales comienzan a demandarle al Estado certidumbre en las expectativas hacia el futuro. La capacidad política de cada actor determinará la posibilidad de que su proyecto predomine en la definición del rumbo de la nación. En ese sentido, este ensayo pretende destacar en su análisis la transformación en la cultura política empresarial, así como su capacidad para imponerle a la sociedad el proyecto de nación que corresponde a sus intereses de clase. El ensayo toma como ejes de trabajo, el transcurrir histórico del período 1970-1990 así como el discurso de sus organizaciones en el año de 1985.

ABSTRACT:

The political culture of the employers in Mexico (an analysis of the discourse).

The more important aspect in the Mexican transition is the rebuild in the civil society-state relation. In a context of political instability the different social actors begin to demand to the state the certainty in the expectations to the future. The political capability in each actor will determine the possibility of prevail of his projects in the definition of the nation course. In this sense, this essay pretends to stand out in the analysis, the transformation in the managerial political culture as well as its capacity for the imposition to the society of the project of nation that corresponds to its class interests. The essay takes as work axis, the historical pass of 1970-1990 period as well as the discourse of the organizations in the 1985.

TEXTO

Planteamiento general

El principal cambio mostrado por nuestra sociedad en su incorporación a la modernidad es la nueva relación entre sociedad civil y el Estado. En este caso las fuertes movilizaciones sindicales que demandaron en los 50's y 60's una participación más activa en el reparto de la riqueza generada en el período de la sustitución de importaciones, la presencia de una burguesía nacional que comenzaba a reclamar su participación en la toma de decisiones en la definición del rumbo de la nación, el nuevo papel de la mujer fortalecido por su incorporación en el mercado de trabajo desde la década de los 60's, fueron quizás los elementos políticos y sociales que mejor daban cuenta de la transición por la que comenzó a atravesar nuestra sociedad. El cuestionamiento que la sociedad civil hacia al predominio del Estado en el manejo global de la sociedad, marcó la

característica más importante para identificar esta etapa de transición, señalaba un cambio en la cultura nacional en la que lo político representó el aspecto central.

El análisis de la transición de la sociedad mexicana en el período 1970-1990, desde la perspectiva del conflicto al interior del bloque dominante, tendrá como hilo conductor el cambio en la cultura política de la clase empresarial. En él destacaremos el cambio en las prácticas políticas mostradas por el empresariado mexicano en su propósito de defender sus intereses de clase, en esta etapa de inestabilidad económica, política y social que hemos señalado como transición. Por esto el problema central en el enfoque de este trabajo se ubica en el manejo práctico y teórico del concepto de cultura y cultura política; conceptos que nos permitirán identificar la capacidad del poder empresarial para definir en la coyuntura el rumbo de la nación.

Hacer referencia al aspecto de la cultura como una forma de manifestación social, implica dirigir la atención a la complejidad organizacional que define a la sociedad que se intenta analizar. De tal manera, que su perfil cultural a de estar lo suficientemente definido como para distinguir su identidad de las demás. La conducta colectiva de la sociedad que refleja su espectro cultural se basa en una concepción tan general que permite referirse a todas y cada una de las manifestaciones sociales a partir de las cuales se identifica una cultura en específico: las costumbres, la idiosincrasia, la organización económica, el sistema político, el arte, la educación formal, los medios de información, la Historia, el papel de la familia, etc. "La cultura, en términos muy generales, se refiere a creaciones sociales, al complejo de actividades y de productos intelectuales y manuales del hombre en sociedad, al modo de concebir el mundo y la vida; la cultura como resultado de una sociedad que integra la organización social, la controla y asegura su cohesión contradictoria" (Alonso y Rodríguez, 1990:342). Es decir, que se apunta al conjunto de las relaciones sociales en sus niveles tanto estructurales como superestructurales; alcanzando todos los niveles de interacción de los individuos desde el ámbito privado hasta el público. La cultura de una sociedad refleja su capacidad para formar, mejorar y perfeccionar al hombre. Implica que el hombre, en sociedad, ha de conocerse a sí mismo para alcanzar su realización como tal. Se trata, en términos generales, del conjunto de conocimientos, modos de vida creados y aprendidos, que una generación transmite o hereda a las nuevas generaciones; fungiendo como el elemento con que una sociedad determinada históricamente da cuenta de su presente y aspira a un futuro definido por ella misma (Abbagnano, 1961:276). De aquí que la característica central de la cultura sea su función como elemento cohesionador del conjunto de la sociedad, a partir del cual todos los individuos encuentran símbolos de identificación colectiva, y en los que, sin lugar a dudas, el nacionalismo representa el símbolo cultural más relevante.

El principal problema en el tratamiento de la cultura es precisamente lo globalizador del concepto, problemático porque independientemente del estadio social que se trate, se hace necesario reconocer la heterogeneidad social que presenta toda formación social. En ese sentido, se tiene que contemplar que la sociedad, su cultura, se compone por un conjunto de subculturas (subsistemas) que dan cuenta de cada uno de los fragmentos sociales que la integran, así como de sus formas específicas de expresión. De tal manera que reconociendo diversas formas de expresión cultural (económicas, políticas e ideológicas), es que se hace comprensible las diferentes formas de expresión de las identidades específicas de cada actor social, por antagónicas que sean sus posiciones o sus propuestas en el escenario nacional.

Al reconocer la heterogeneidad social que caracteriza a toda cultura y la amplitud a que hace referencia ese concepto, es que se hace necesario, para facilitar el análisis sociológico, delimitar un ámbito concreto de ese complejo contexto al que hacemos referencia. Para el objetivo que persigue este trabajo habrá de señalarse la especificidad

del concepto de cultura política, a partir de dos aspectos: el primero, alude a la estructura social, y el segundo, al campo específico de lo político. Respecto a la cuestión de la estructura social ha de considerarse la composición de la sociedad a partir de sus clases sociales, donde lo político tiene explicación a partir de las diferentes conductas políticas que éstas adoptan al interactuar dentro de las normas del sistema político de la sociedad en la que coexisten. "El término cultura política ha sido utilizado como el conjunto de valores, orientaciones, actitudes, expectativas (sobre todo), normas, conductas y prácticas acerca del sistema político. La subordinación, la adhesión, la confianza, la justificación, la ilusión, la participación, la apatía, la resistencia, la contestación, la impugnación y lucha alrededor de las actividades públicas son enmarcadas en este amplio catálogo de lo que se denomina cultura política. Esta cultura tiene que ver con las tradiciones, hábitos y costumbres políticas de grupos que originan identidades y dan sentido a su actividad. Todo poder político se sustenta en cierta cultura política y al mismo tiempo la moldea y adapta a sus exigencias." (Alonso y Rodríguez, 1990:344).

Considerando tal definición, resulta conveniente tener presente que la heterogeneidad social sugiere la presencia de una diversidad de intereses de los sectores o clases sociales que integran una sociedad, mismos que anteponen en sus prácticas políticas dirigidas a ejercer el poder; alcanzar o apoderarse del Estado para garantizar la defensa de sus intereses específicos de clase. De tal manera, que la misma heterogeneidad social refleje la existencia de subculturas que coexisten en una misma sociedad, a la vez que éstas puedan estar en constante contradicción, como es el caso en el ejercicio de la política. En la lógica de esta perspectiva, al analizar la cultura política de los empresarios en México en el período 1970-1990, tendremos que delimitar todavía más el campo de estudio. Nos referiremos a la cultura política de la clase dominante en México, a la burguesía nacional, a los propietarios del capital personificados por la élite empresarial.

En tanto que nuestro análisis intenta captar la forma en que la cultura política del empresariado nacional se modificó desde la década de los 70's, tendremos que considerar la idea del futuro en el quehacer político de este actor social. Es decir, que se analizará la cultura política empresarial desde la perspectiva de la capacidad de esa clase social para construir una nueva realidad, alternativa a la crisis de la década de los 70's, que sea favorable a sus intereses de clase. Se trata de hacer notar como el empresariado mexicano logra hacer llegar al seno del Estado su proyecto de nación; de observar como la fuerza social del empresariado en México se constituye en fuerza política (Zemelman, 1989:36) en la medida en que el Estado mexicano de la década de los 80's incorpora un nuevo un modelo económico coincidente con el proyectado por los empresarios desde mediados de esa década, en este caso consideraremos como dato empírico el discurso de las organizaciones empresariales en el año de 1985.

A partir de ello es que pondremos virtual atención en el papel que juegan las organizaciones empresariales, puesto que éstas fungen como el principal instrumento de expresión a partir del cual las élites empresariales interfieren en el sistema político mexicano. Esto quiere decir que esta élite actúa en la esfera de la política mexicana mediante grupos de presión, sin que quede excluida la posibilidad de actuar políticamente por medio de un partido político; se trata de una acción dual en la que a lo largo de la historia posrevolucionaria del sistema político mexicano, los empresarios van utilizando esos dos instrumentos de ejercicio de la política. La diferencia sustancial, entre uno y otro, es que los partidos requieren generar mayor consenso en el grueso de la población, complicando el impulso abierto y concreto de intereses específico de un sector o clase social; mientras que los grupos de presión, en este caso las organizaciones empresariales tienen por objeto presionar al Estado o a la sociedad para defender o imponer sus intereses específicos, ya sean sectoriales o de clase. "Entendemos por grupo de presión la actividad del conjunto de individuos que unidos por motivaciones comunes tratan de

influir, a través del uso o de la amenaza del uso de sanciones, en las decisiones que toma el poder político, ya sea a fin de cambiar la distribución prevaleciente de bienes, servicios, cargas y oportunidades, ya sea a fin de conservarla ante las amenazas de intervención de otros grupos o del poder político mismo". (Pasquino, 1981:751).

La cuestión es identificar como el ejercicio de la política por parte de los empresarios mexicanos resultó, finalmente, con más capacidad para incidir en la direccionalidad de la realidad nacional, a diferencia, por ejemplo, de la práctica política de los trabajadores quienes prácticamente quedan excluidos, al menos en el corto plazo, del proyecto de nación de corte neoliberal que impulsa el gobierno de Salinas de Gortari. Es necesario, entonces, considerar que en la heterogeneidad social inmersa en toda cultura se observa el antagonismo entre los proyectos de nación provenientes de las diversas clases o sectores de la sociedad; puesto que el orden requerido por todo sistema político democrático dependerá de que todos los actores sociales se perciban como parte integrante del proyecto de nación que impulsa el Estado. De tal manera, que toca al Estado buscar el consenso para legitimar ante toda la sociedad el proyecto de nación que impulsa. Esto representa la mejor expresión de la identidad cultural de un país en donde el proyecto impulsado por el Estado es percibido como un proyecto común, un proyecto de la nación que se proyecta hacia el futuro como la única alternativa viable (Zemelman, 1990:187). Esta posibilidad a futuro es la reflejada por el discurso político tanto del Estado como de las clases dominantes, aunque en este trabajo se destaque, exclusivamente, la importancia del discurso empresarial, que en nuestra interpretación aparecerá como uno de los principales elementos de legitimación del nuevo proyecto que impulsa el Estado mexicano desde la década de los 80's.

El discurso empresarial, visto desde la perspectiva de la comunicación política, será tratado como el medio por el cual los empresarios transmiten públicamente sus mensajes a los miembros del sistema político influyendo, por tanto, en la conformación de opinión pública (Panbianco, 1981:326) y en la definición de la toma de decisiones que guiará a la nación. Es el discurso de las organizaciones empresariales donde la clase capitalista en México expone sus demandas, cuestiona o apoya al sistema político; en el discurso del año de 1985 el empresariado nacional expresaba el proyecto de nación que paulatinamente instalaron los gobiernos de De la Madrid (1983-1988) y el de Salinas de Gortari (1989-1994).

El surgimiento del conflicto empresarios-Estado

La fuerte crisis de legitimidad que enfrenta el gobierno de Echeverría (1970-1976) coincide con el agotamiento del modelo de acumulación denominado "proceso de sustitución de importaciones", en el cual el papel económico que desempeña el Estado mexicano constituye el elemento central en el desarrollo social en el período 1940-1970. La característica fundamental de este proceso de industrialización está definida por la intervención directa del Estado en la economía, por la capacidad gestora y de inversión de la burocracia que conduce al Estado a desempeñar un papel relevante en casi todas las ramas de la economía. Lo mismo en la agricultura, que en la actividad industrial, la creación, financiamiento y administración de la infraestructura y el transporte, en el circuito financiero que garantiza el crédito requerido para impulsar la participación empresarial. En ese sentido, es la participación económica del Estado en este período la que conduce el proceso de desarrollo económico que aspira a terminar con la dependencia hacia el exterior, impulsando la diversificación de los productos manufacturados de consumo duradero y bienes de capital, sustituyendo así los productos provenientes del exterior por productos nacionales.

La crisis económica que comienza a manifestarse desde principios de los 70's, marca el momento en que el Estado benefactor, característico de este período, se ve imposibilitado para continuar dirigiendo el desarrollo económico del país. En particular, el déficit presupuestario es reflejo, al menos, de dos cuestiones fundamentales en la etapa final de este período: uno, que el objeto de la empresa paraestatal es de carácter social y no lucrativo, por lo que, la inversión requerida para garantizar su participación directa en la economía no habría de ser recuperada, esta situación favorece los intereses del capital privado nacional y extranjero, [1] así como también posibilita un mínimo en el consumo de las capas medias y populares; dos, que la política económica del Estado mexicano no antepone su estabilidad financiera a la importancia de acelerar el desarrollo económico, persiguiendo ese objetivo dispensa la captación fiscal optando por el endeudamiento externo y la emisión monetaria, privilegiando, nuevamente, la acumulación en manos del capital privado local y foráneo. El desenfrenado endeudamiento externo que comienza en el gobierno de Echeverría, es el suceso que estrechará, aun más, los lazos de dependencia hacia el exterior. Esto va a definir el elemento de presión a partir del cual el capital extranjero, por mediación de instituciones financieras internacionales, comenzó a sugerir la incorporación de un proyecto neoliberal que facilitara, en las nuevas condiciones de globalización internacional, la articulación de nuestra economía con el exterior.

La crisis económica, la falta de credibilidad en el gobierno, y por tanto la necesidad de generar consenso, así como el deterioro del Estado benefactor, es el contexto en el que la élite política intenta reformular la estrategia económica para enfrentar de manera exitosa la crisis. De hecho, el punto central de la política económica de Echeverría giraba en torno al fortalecimiento del papel económico del Estado; se planteaba darle continuidad al intervencionismo estatal, en un intento por reformular el anterior modelo de acumulación. El objetivo era fortalecer la posición estatal a partir de limitar la participación del capital extranjero, elevar el control fiscal para favorecer la capacidad financiera del Estado, fortalecer el incremento de su intervención directa en la economía para consolidar su rectoría en el proceso de desarrollo y elevar el nivel de vida de las clases medias y trabajadoras.

Aunque en el período de 1971-1974, los empresarios consideran que sus organizaciones sectorizadas no representan debidamente sus intereses de clase, desde un principio del régimen echeverrista, comienzan a presionar al gobierno mexicano para que sean definidas las reglas del juego en la resolución de la incierta situación económica. Las primeras propuestas empresariales para solucionar la crisis son manifestadas por la Concanaco, Concamin, Coparmex y Amis, organizaciones que se declaran a favor de la eficiencia en la recaudación fiscal, más no por el incremento de los impuestos. La oposición de los empresarios a las intenciones de reformular la estrategia económica del Estado comienza a organizarse. Es para 1972, cuando el gobierno anuncia el proyecto de ley que reglamentará la inversión extranjera, que la Cámara Americana de Comercio (Camco) convoca a los empresarios mexicanos para presentar un frente común de defensa. En el IV Seminario de Publicidad y Medios de Comunicación celebrado en Monterrey, el representante de esa cámara propone la creación de un consejo empresarial que aglutine a las principales organizaciones empresariales, con el objeto de propiciar el intercambio de opiniones a partir de un vínculo empresarial real para resolver los problemas que enfrenta el país. La propuesta apunta a romper con la sectorización de las organizaciones empresariales y dar mayor representatividad a una organización general que se encargara de negociar con la élite política. Dicha organización al contar con la representación de las principales organizaciones empresariales tendría mayor capacidad para hacer escuchar las posiciones e intereses del empresariado nacional. La idea inicial de la Camco [2] se vería materializada más tarde, cuando se crea en 1975 el Consejo Coordinador Empresarial, momento en que abiertamente se reconocerá el enfrentamiento con el Estado.

Otro de los aspectos que venían provocando el malestar empresarial fue la política exterior del gobierno de Echeverría, que en una definida posición antiimperialista estrechaba relaciones diplomáticas con países como China, URSS, Cuba y Chile. Particularmente la invitación al presidente chileno en 1972, el discurso de Allende en Guadalajara, provocó una virulenta respuesta de las organizaciones empresariales del norte del país, en el estado de Nuevo León. En su declaración los empresarios reconocían el mérito del pueblo chileno que se defendía de la imposición del socialismo comunizante y exhortaban al presidente Salvador Allende para seguir luchando contra el estatismo marxista que hacía perder a los pueblos la dignidad, alegría de vivir y la libertad. A tal grado llegó el radicalismo empresarial que la Coparmex, Concanaco y Concamin tuvieron que mediatizar la posición empresarial declarando, el 10. de diciembre de ese año, que si bien no coincidían con la ideología del Dr. Allende, reconocían "la dignidad, limpieza y coherencia de su trayectoria política y humana" (Arriola,1988:94).

Otro aspecto del conflicto tiene que ver con el "populismo" de Echeverría. En torno a esto el Estado mexicano pretendía recuperar el consenso perdido con la represión del movimiento estudiantil de 1968. El discurso gubernamental retomó los principios de la revolución mexicana, permitió el fortalecimiento del sindicalismo independiente, y conforme se fue recrudeciendo las relaciones con los empresarios, utilizó a funcionarios del gobierno, a la burocracia del PRI y a la representación formal del movimiento obrero (CTM) para recriminar la falta de compromiso de los empresarios mexicanos.

Las relaciones entre el empresariado y el gobierno de Echeverría se encontraban en una verdadera crisis. El 17 de septiembre de 1973, día en que se firmaría el acuerdo salarial, Eugenio Garza Sada, el miembro más prominente del Grupo Monterrey, fue asesinado. En su entierro Ricardo Margáin Zozaya, hizo un discurso en el que acusaba al gobierno de Echeverría de propiciar la violencia. El acto provocó por parte del presidente de la nación la iniciativa de integrar la alianza popular nacional para enfrentar a los empresarios antipatrióticos. Los sectores populares comenzaron a manifestar su apoyo al presidente hasta que en octubre de ese año la familia Garza Sada reprobó el discurso de Margáin (Basáñez, 1990:51). Aun así, el enfrentamiento entre el Estado y los empresarios era ya inevitable.

Es en este contexto que se abre el conflicto entre los empresarios y el Estado, al coincidir que el gobierno de Echeverría instrumentaba el "populismo económico" como estrategia para reivindicar la hegemonía del Estado ante la oposición empresarial, el manejo de una política exterior antiimperialista que estrechaba vínculos diplomáticos con gobiernos que profesaban sistemas sociales antagónicos a los principios ideológicos, políticos y económicos de la clase empresarial.

Si bien el conflicto de los empresarios y el Estado se va dando conforme avanza la intención reformista del gobierno de Echeverría, para el año de 1975 el sector empresarial a logrado consolidar una unidad política en torno a una nueva organización que tendrá por objetivo contener las iniciativas estatales. Se trata de la constitución del Consejo Coordinador Empresarial que se funda en ese año y que aglutina a las principales organizaciones empresariales Concamin, Concanaco, Coparmex, Asociación de Banqueros de México (que después de la nacionalización de la banca fue sustituida por la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa), la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (organización que agrupa a los 30 capitalistas nacionales más poderosos del país) y el Consejo Nacional Agropecuario. Esta organización de organizaciones funge como punta de lanza en la oposición ante el Estado, en un momento que la crisis económica ya ha dejado ver sus efectos más negativos para la nación. La confrontación ideológica entre esos dos actores sociales se

habían recrudecido, el primer documento del CCE se titulaba "Proyecto para crear una imagen adecuada y fidedigna de los empresarios", en éste se establecía una estrategia de trabajo basada en los siguientes puntos: a) la necesidad de incidir en la opinión pública, b) en el campo de los intelectuales que a su vez tenían influencia en las universidades y c) en el ámbito de empleados y trabajadores de las empresas privadas (Arriola, 1988:78).

La situación económica y la relación de los empresarios y el Estado se van complicando conforme se acerca el final del sexenio, en los dos últimos años del gobierno de Echeverría se hizo evidente que los empresarios se oponían a la política económica del Estado, por lo que éste tuvo que optar por el endeudamiento externo que poco a poco fue desbordando las posibilidades de recuperación de la economía nacional. Por otra parte, las presiones de la economía internacional obligaron a ese gobierno a adoptar la movilidad cambiaria que duplicó inmediatamente el costo del dólar, de 12.45 pesos por dólar pasó a un precio de 25 pesos por dólar, afectando negativamente a la economía nacional en sus relaciones de intercambio comercial con el exterior. Esta situación empeoró cuando los empresarios nacionales comenzaron a utilizar la fuga de capitales como instrumento de presión política y económica contra el Estado. La acción empresarial coadyuvó a acrecentar la crisis de un modelo de acumulación que ya había dado señas de su agotamiento desde el principio de este régimen. A tal grado llegaba ya el conflicto entre el Estado y los empresarios, que éstos, conscientes de que al expresar sus simpatías por algún candidato prácticamente anularía la posibilidad de su postulación, optaron por no manifestarse políticamente. Fue hasta mediados de 1975 cuando se dio a conocer la postulación priísta de López Portillo, coyuntura electoral donde la oposición no presentó candidato a la presidencia, que Concanaco, Coparmex, Concamin, ABM y Amis manifestaron su beneplácito por el candidato electo.

A principios de 1976 la Conferencia Nacional de Colonias Proletarias, organización fantasma, denunciaba en un desplegado a la prensa, el 21 de febrero, la conspiración de acaudalados empresarios encabezados por la familia Garza Sada para desestabilizar al país mediante rumores. El desplegado señalaba que el objetivo de esa campaña era desprestigiar al persona del presidente Echeverría y contener la Ley de Asentamientos Humanos (Millán, 1988:74). Una de las últimas políticas de Echeverría fue el decreto para expropiar las tierras del Yaqui. Esta medida apuntaba a frenar la movilización campesina en el norte del país, que exigía una revisión de la reforma agraria, al mismo tiempo que fortalecer el respaldo del gobierno ante los empresarios. El alcance de la política gubernamental afectó a la fracción terrateniente que se había aliado con la fracción industrial del norte del país. Los resultados concretos de la decisión no necesariamente alcanzó los objetivos planteados, puesto que si bien fue un duro golpe a los grandes propietarios, esto provocó una participación política más agresiva por parte de los empresarios. Es el caso de Clouthier, jefe de una de las familias afectadas, que su actividad política lo condujo a la candidatura presidencial postulada por el PAN en las elecciones de 1988.

La característica del período 1970-1976 en cuanto a las relaciones entre el Estado y los empresarios mexicanos, está definida por el surgimiento de un conflicto que en lo sucesivo posibilitaría la unificación empresarial contra el Estado. Sin que esto sugiera que es la primera vez que se da una situación de ese tipo, [3] lo novedoso de la relación entre esos dos actores sociales, es la diferente condición que define la correlación de sus fuerzas. En el caso del Estado mexicano, tanto la crisis económica como la de legitimidad cuestionaban su capacidad hegemónica para conducir a la nación; por lo que toca a los empresarios, se hace evidente en la década de los 70's que mientras el proceso de industrialización, que inició desde 1940, desgastó la capacidad financiera del Estado mexicano, a este sector social le redituó su consolidación como clase, y por tanto, su presencia económica en el desarrollo de la nación. De hecho la fortaleza económica del

empresariado nacional será la base fundamental en la efectividad de su estrategia política. Este es el contexto en el que se detecta el cambio en la cultura política de los empresarios nacionales.

La conciliación y desencanto empresarial

Si bien el gobierno de López Portillo (1977-1982) habría de atender las demandas de apertura política que la sociedad civil demandaba, la crisis económica constituía el problema fundamental que amenazaba con asfixiar a la nación. Para solventar esta situación se hacía necesario reactivar la economía a partir de un proyecto de desarrollo lo suficientemente atractivo para "recuperar la confianza" del sector empresarial, garantizando así su participación para incrementar la inversión y la productividad. El nuevo proyecto que impulsa la élite política conocido como el programa de Alianza para la Producción, además de incorporar las medidas acordadas con el FMI (flotación del peso, libertad cambiaria, déficit presupuestario no mayor al PIB para el año de 1977, etc.), se propone ganar el consenso social así como conciliar los dos polos antes en conflicto: los empresarios y el Estado.

En la medida que López Portillo refrenda su disposición para conciliar el proyecto económico de su gobierno con los intereses empresariales, la actividad política de los empresarios se va desactivando paulatinamente. La unidad de ese sector social alcanzada con la formación del CCE en el año de 1975, se desarticula nuevamente. En la práctica se dan cambios en la dirigencia de las organizaciones empresariales; la línea radical es sustituida por la moderada en la medida que el nuevo gobierno abandonaba las posiciones populistas y prioriza la conciliación con los empresarios nacionales. Dejaba de ser necesario transformar una crisis económica en una crisis de confianza, ya no se requería desprestigiar la figura presidencial, sino que la conciliación habría de traducirse en respaldo político e ideológico que ahora brindarían los empresarios al Estado. Las respuestas no se hicieron esperar, en febrero de 1977, el representante de la Camco-Monterrey se comprometió a hacer una campaña para que retornaran al país los capitales fugados al finalizar el sexenio de Echeverría. Mientras que la Canacintra y la Coparmex declaraban que el retorno de los capitales sería lento y cauteloso mientras no se garantizara la protección a la propiedad privada. Aun sin que coincidan en las posiciones ante la situación del país y el gobierno mexicano, las organizaciones empresariales redujeron gradualmente su actividad ideológico-política retomando su carácter de organismos sectoriales, los cuales tienen por objetivo fundamental la gestión económica ante el Estado.

La importancia que reviste para el gobierno de López Portillo recuperar la participación de los empresarios en el desarrollo del país, se refleja en los convenios de inversión conjunta, entre el capital estatal y el privado nacional, firmados con las fracciones más radicales del sector empresarial. Evidentemente, la estrategia del nuevo régimen apunta a recuperar de inmediato la confianza de los empresarios nacionales.

"En la práctica, la confianza recuperada se expresaba con la celebración de convenios de inversión conjunta como el celebrado con el Grupo Monterrey y el gobierno por 100 mil millones de pesos, también los créditos concedidos al Grupo Alfa por Fonatur para el desarrollo de un conjunto turístico de gran lujo en Manzanillo, y finalmente, la concesión de la segunda etapa del conjunto siderúrgico Las Truchas al mismo Grupo Alfa. Con todo este tipo de concesiones los representantes del gran capital se han convertido en los principales defensores de J.L.P. ante algunas críticas surgidas de otros sectores". (Cordero, 1982:102)

La respuesta del empresariado en el plano económico, con la cual mostraba su disposición ante la nueva política del Estado (según declaraciones del CCE el 4 de febrero de 1977 en el periódico Excelsior), era fundamentalmente promover el incremento de la inversión y la productividad, propiciar el más bajo nivel de los precios y garantizar un programa de productos básicos. La envergadura de la crisis económica y la lenta y parcial respuesta empresarial a la demanda del Estado mexicano, sobre todo lo que toca a la repatriación de capitales fugados a finales del sexenio de Echeverría, se proyectaba como el contingente de mayor peso para lograr el éxito del proyecto económico.

El petróleo fue el factor económico que diluyó la amenaza del fracaso. Las reservas probadas de 14 mil millones de barriles [4] daban al Estado mexicano el respaldo financiero para continuar dirigiendo la economía nacional, a partir de su presencia predominante en su desarrollo. El petróleo dotaba a la burocracia política de capacidad negociadora ante la iniciativa privada y el capital extranjero, en la medida que recuperaba la autonomía para orientar la inversión, manteniendo así su hegemonía en la conducción de la economía. Esto se planteó a partir de dos puntos fundamentales: a) activando la producción industrial en torno a la producción petrolera, con el fin de propiciar la creación de mayor número de fuentes de trabajo; y b) fortaleciendo la situación financiera con las divisas generadas por la misma exportación del petróleo.

Aunque en general el sector empresarial no cuestionaba la estrategia de recuperación, sí criticaba de manera puntual los mecanismos para controlar la inflación y el déficit del presupuesto público. Los empresarios nacionales concluían desde entonces, que la causa de la crisis económica era el excesivo gasto público. Desde 1979, ante la posibilidad de incorporarse al GATT los empresarios no alcanzaban a presentar una posición unificada ante tal eventualidad por lo que el Estado manejo la negociación con relativa autonomía. En el discurso pronunciado por el presidente de la nación el 18 de marzo de 1980, se planteaba la decisión acerca de las demandas de los empresarios: a) la creación del Sistema Alimentario Mexicano, b) mantener una explotación petrolera de 2.5 millones de barriles diarios y c) no ingresar al GATT.

La híbrida respuesta de los empresarios forzó al gobierno de López Portillo a recurrir al endeudamiento externo, que en ese período alcanzó un volumen aproximado de 90 mil millones de dólares. La profundización del déficit presupuestario, la devaluación del peso y la galopante inflación al final del sexenio reflejaron lo ficticio del crecimiento económico impulsado por el auge petrolero. El primer descalabro se dio en julio de 1981 cuando el precio del petróleo en el mercado internacional bajo de 34 a 29 dólares por barril. El segundo, a principios de 1982 cuando se autorizaron los incrementos salariales. Y tercero, con la decisión del Banco de México de retirarse del mercado cambiario, por lo que se propició aun más la especulación cambiaria y la fuga de capitales. Esta última situación no refleja necesariamente la intención de los empresarios mexicanos para presionar al gobierno de López Portillo, sino que más bien refleja la intención de ese sector para hacer rendir más su capital, sin importarles las condiciones económicas del país. Lo que queda claro es que esta medida promovida por los empresarios nacionales afecta gravemente la situación financiera y representa, la vez, el detonante que provoca nuevamente una confrontación con el Estado.

El 5 de Agosto de 1982, el Banco de México regresó al mercado cambiario fijando tres tipos de cambio: El preferencial (49 pesos por dólar), el mexdólar (69.5 pesos por dólar) y el oficial (75 pesos por dólar). Mientras que en el mercado negro se cambiaban 150 pesos por dólar (Arriola, 1988:177). En agosto los principales grupos empresariales de Nuevo León daban su diagnóstico acerca de la causalidad de la crisis económica: a) el excesivo déficit público, b) la multiplicación de las empresas paraestatales, c) el crecimiento del aparato burocrático, d) los subsidios a los servicios estatales y e) el control de precios.

Como es posible advertir los empresarios mexicanos cuestionaban el modelo de desarrollo económico que impulsaba la élite política, se preparaba ya la reactivación política de ese sector. El rompimiento de la alianza entre los empresarios y el Estado, que prácticamente había durado todo el sexenio, estaba en puerta, la nacionalización de la banca sería el detonante de la reaparición del conflicto político entre esos dos actores sociales. Evidentemente, la nacionalización de la banca desgastaría hasta su nivel más bajo la alianza propiciada en el inicio del sexenio, aunque la ofensiva empresarial no se dejó escuchar de manera eficaz. Coparmex, Concanaco y CCE, que en esos momentos expresaban el sentir del "ala radical" empresarial, fueron las organizaciones que buscaron en los primeros días posteriores a la nacionalización una respuesta de mayor peso; mientras que Concamin y Canacintra, que expresaban el sentir del "ala moderada" empresarial, daban como un hecho consumado la nacionalización. [5] Sin embargo, aun con la falta de unidad en la posición empresarial ante la medida gubernamental, se marcaba la pauta para reorganizar la ofensiva contra el Estado: "Se despliega a partir de entonces una agresiva acción empresarial en cuyo discurso apela a la sociedad civil y a las instituciones de la república, para contener el poder presidencial e implantar su proyecto" (Tirado, 1990:54).

Las diferencias reflejadas al momento del conflicto, se verían prácticamente subsanadas a mediados del siguiente sexenio en el que las organizaciones empresariales expresan el proyecto de nación acorde a sus intereses de clase; a la vez que la nueva burocracia política le va dando forma al nuevo proyecto económico con características neoliberales.

Los intentos de la élite política, a lo largo del período 1970-1982, para superar las crisis económica; el consecuente fracaso y el agravamiento en las relaciones con los empresarios nacionales, obligó al gobierno de López Portillo a tomar la única alternativa viable para contener la fuga de capitales y garantizar el ordenamiento de la banca nacional: la nacionalización de la banca decretada el 1o. de septiembre de 1982. El gobierno mexicano prefirió afectar los intereses de la fracción financiera de la burguesía nacional, [6] acción que provocó la protesta diferenciada en el sector empresarial. De aquí hasta la primera mitad del siguiente sexenio, los empresarios mexicanos, por mediación de sus organizaciones, retomaron una actitud radicalmente politizada para presionar al Estado.

Otra vez, la deteriorada situación económica presionaba a la élite política en la toma de decisiones que definirían el rumbo de la nación. Sólo que ahora, en la nueva coyuntura de cambio gubernamental los conflictos al interior del bloque dominante (entre la burguesía nacional y el Estado) y las fuertes presiones externas que demandaban el pago de los intereses de la deuda externa; exigían un candidato presidencial que en lo inmediato conciliara el conflicto con los empresarios y tuviera la habilidad para negociar la deuda externa con la banca internacional. Nuevamente, como en el cambio presidencial al finalizar el mandato de Echeverría, el desafío para el gobierno entrante dependería de la conciliación con los empresarios para enfrentar la crisis desde una posición menos deteriorada. En lo político, el desafío del nuevo gobierno sería la reconciliación con los empresarios para hacer más viable, al menos, la recuperación económica del país. Se había demostrado que mientras este sector de la sociedad no colaborara con el régimen, las posibilidades para solucionar el problema de la crisis serían mucho más estrechas. Por otro lado, también quedaba demostrado que tener en contra al empresariado, amén de los problemas económicos que el Estado se acarrea, las condiciones políticas empeoran puesto que la acción política de este sector tuvo más capacidad para restarle credibilidad al régimen que los demás actores sociales. En gran medida esto explica el desprestigio del gobierno echeverrista y la imagen que prevaleció de López Portillo. La incidencia que tienen las organizaciones empresariales para generar corrientes de opinión, ya sea por medio de declaraciones sectoriales manifiestas en el discurso de sus

organizaciones, sea por los rumores que se difunden desde los aparatos administrativos de las empresas o por las opiniones de "intelectuales" que trabajan para compañías editoriales o de prensa, propiedad de fuertes empresarios, que finalmente, cooperan para difundir una ideología acorde con sus intereses de clase.

Nuevo programa económico, base de la alianza

La nominación de De la Madrid a la presidencia de la república por parte del PRI fue recibida con beneplácito por los empresarios mexicanos, puesto que le consideraban como un conservador proclive a los postulados económicos demandados por ese sector social (Story, 1990:261). Sus primeras políticas corroboraron sus simpatías con el sector privado y aunque la experiencia del sexenio anterior les mandaba cautela, ante la política económica adoptada al inicio de su gobierno propiciaron al menos el diálogo con los empresarios nacionales. Este sería el inicio del restablecimiento de una alianza que promete prolongarse a mediano plazo.

Persistiendo la problemática económica, pero con niveles sin precedentes en el avance del desarrollo económico del país, el gobierno de De la Madrid (1983-1988) mostró desde su inicio la decisión de pactar nuevamente con la burguesía nacional. Consciente de que el mayor punto de conflicto con los empresarios estaba fundado en la expropiación de la banca, inició el proceso de desnacionalización bancaria. Las primeras medidas para recuperar la confianza de los empresarios constó de indemnizar generosamente a los afectados, vender el 34% de las acciones de los bancos nacionalizados, la venta de los activos no financieros propiedad de los bancos nacionalizados, y sobre todo, que se dejó en manos del capital financiero privado el manejo de las casas de bolsa que rápidamente se constituirían en banca paralela, la constitución de un Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca) para la documentación en moneda nacional a los adeudos en dólares de los grandes consorcios privados, etc. (Jarquín y Cisneros, 1987:422).

La reconciliación entre los empresarios y el Estado estuvo determinada, primero, por la intención mostrada del presidente De la Madrid de revertir en lo inmediato, aunque fuera parcialmente, la nacionalización de la banca. La decisión propició una actitud más negociadora en el ala radical de las organizaciones empresariales, es el caso del llamado de la Coparmex en noviembre de 1982, presidida por Clouthier en ese momento, para suspender las reuniones de "México en libertad". Posteriormente, las expectativas mejorarían con el crédito de 3 840 millones de dólares otorgados por el FMI, tras la firma de la carta de intención de esa institución internacional en la que se establece la revisión de la tarifa del sector público y la reducción del déficit presupuestal. Por otra parte, en la toma de posesión presidencial De la Madrid anunció el Programa de Recuperación Económica (Pire), que sería el punto fundamental en la nueva alianza con los empresarios. El programa daba la pauta para atraer la participación de ese sector, en él se definía la participación empresarial como fundamental para sentar las bases del proyecto de nación de ese gobierno; en el cual se anunciaba ya la intención de disminuir gradualmente la intervención del Estado en la economía a partir de la racionalización del gasto público.

Como ya lo sugeríamos, la respuesta a la nacionalización de la banca se vería en este sexenio cuando los empresarios restablecieran su unidad política superando la sectorización de sus organizaciones. Más aun, la reorganización política de los empresarios en el gobierno de De la Madrid modificó sustancialmente el escenario político de la nación. El sector utilizó sus dos instrumentos de participación política, tanto a las organizaciones empresariales como la participación partidaria (Camp, 1990:47), con los que impulsaría el proyecto de nación que en lo político, económico y social respondiera a sus expectativas a futuro. Por lo que toca a la tarea de las organizaciones empresariales,

para 1983 se podía apreciar ya un fuerte avance en la unificación de las diferentes posiciones empresariales. Lo novedoso del nuevo papel político de la élite empresarial es su renovado esfuerzo por utilizar al máximo la vía partidaria, además de estrechar vínculos con otras instancias sociales, civiles y religiosas, para presionar al Estado. Evidentemente, considerando la afinidad del partido con la ideología empresarial, un grupo importante de empresarios del norte, representantes del ala radical, tomo posiciones del lado del PAN. Es el caso del empresario Adalberto Rosas, candidato de ese partido a la gubernatura del estado de Sonora; las campañas electorales de Francisco Barrio en Chihuahua (ex-vicepresidente del Centro Patronal del Norte), de Carlos Anaya en Sonora (ex-vicepresidente de la Coparmex), de Jorge Rincón en Culiacán (presidente del CCE en Sinaloa), de Canales Clariond en Nuevo León (expresidente de la Canaco de Monterrey) (Millán, 1988: 172). Por lo que toca a la acción política de los empresarios que define como objetivo de proselitismo político a la sociedad civil, tenemos que esta diversificación en el ejercicio de la política es la que reditúa el fortalecimiento general de la derecha mexicana, a partir de la cual se promueve la "desobediencia civil" como forma concreta de oponerse al fraude electoral. Los empresarios fincaron sus esfuerzos en asociaciones como las siguientes: Asociación Cívica Femenina (Ancifem), Desarrollo Humano Integral y Acción ciudadana (Dhiac), Movimiento Familiar Cristiano, Frente Cívico de participación ciudadana, Asociación Cívica Estudiantil y diversos comités de promoción y defensa del voto (Jarquín y Cisneros, 1987:426). El producto de este esfuerzo va a ver sus frutos con la campaña poselectoral de Clouthier desde agosto de 1988, el triunfo (reconocido) de Ruffo en la gubernatura de Baja California en 1989, y más tarde con la renuncia de Ramón Aguirre a su supuesto triunfo en Guanajuato, que representó el reconocimiento informal de Fox, candidato del PAN a la gubernatura de ese estado en 1991.

En mayo de 1985 el gobierno hace explícito los cambios estructurales anunciados en 1982. La privatización a concretarse a partir de 1986 cuando el recorte presupuestario y la política de tope salarial ya se había consolidado, de tal manera que la estabilidad en la relación empresarios y el Estado solo se vio empañada con el decreto de expropiación de los predios urbanos en el Distrito Federal, a causa de los sismos de septiembre de 1985. La decisión provocó una respuesta inmediata por parte de las organizaciones empresariales, como veremos más adelante cuando analicemos su discurso en ese año. La respuesta empresarial ante ese suceso reflejó nítidamente la voluntad política de ese sector, sustentada a través de la unidad de las diferentes facciones empresariales agrupadas en el CCE (Tirado, 1990:55), y que caracterizó su actividad política hasta que se hizo evidente en la nación la instalación del proyecto neoliberal consolidado a la mitad del sexenio de Salinas de Gortari. Lo importante en este proceso es que se fue estabilizando la alianza, desde el primer año del gobierno de De la Madrid, es tener presente que aunque en ese gobierno ya se iba advirtiendo la decisión de la élite política para impulsar un modelo de acumulación que respondía a las demandas empresariales, este sector, por medio de sus organizaciones continuaba criticando la lentitud e ineficacia de las medidas gubernamentales.

La política recesiva internacional que se manifestaba a principios de 1986, la caída en los precios del petróleo, la rigidez del circuito financiero que agravó el problema de la deuda externa, el violento descenso en el poder adquisitivo de las clases medias y trabajadoras, los drásticos recortes al gasto social y los renovados esfuerzos por reactivar el sector externo fue el preámbulo del Programa de Aliento y Crecimiento (PAC) firmado en ese año, que realmente significaba el avance a la siguiente etapa del proyecto económico del gobierno de De la Madrid. La designación de Salinas de Gortari, a mediados de 1987, como candidato a la presidencia por el partido oficial produjo un boom en la bolsa mexicana de valores, lo que significaba la satisfacción de los capitalistas mexicanos. Esto indicaba que la certidumbre en las expectativas racionales de los empresarios estaba

determinada porque el candidato a la presidencia garantizaba la continuidad en el nuevo proyecto económico. Fue hasta el "crack" de la bolsa de valores mexicana en octubre de 1987, que se desencadenó la devaluación que pone al gobierno mexicano de espaldas a la pared. La profundización económica y la protesta de los medianos y pequeños inversionistas que desató el abuso de la especulación financiera, encontró como respuesta de gobierno mexicano la implementación del Pacto de Solidaridad Económica (Pase). Era la estrategia política que insertaba el nuevo elemento de la concertación entre los empresarios y los trabajadores. El pacto lo firmaron el CCE, que en ese momento era presidido por Legorreta, y por CTM la representación formal de los trabajadores, liderado por Fidel Velázquez. De tal manera que el nuevo "pacto" estaría legitimado en el apoyo global de la sociedad. Las principales medida del pacto era la política de tope salarial, que se aceptaba cuando el líder de la CTM había amenazado unos días antes con la huelga nacional, y el control de precios (Basáñez, 1990:108). Por otro lado, el hecho que Legorreta presida el CCE sugiere que la facción financiera había recobrado la hegemonía en la representación del empresariado nacional, así como se tendría que reconocer la alianza con la élite política al aceptar su participación en la concertación. Así lo mostraba el tono que tomaban las declaraciones del CCE, en el sentido que esta organización agrupaba a los 300 empresarios que decidían el rumbo de la nación.

"El gobierno de la República no sólo había cedido a la presión empresarial, sino que aceptaba en los hechos, la concepción patronal de que la crisis por la que atravesaba el país encontraba su origen en un Estado que ineficientemente intervenía como rector de la actividad económica" (Bolívar, 1990:54)

La firma del PASE apuntaba a la contienda electoral que se aproximaba en una coyuntura en que las contradicciones políticas eran patentes en todo el escenario político. Si bien se reconocía la alianza con el empresariado nacional, el efecto de la nacionalización de la banca había provocado serias fisuras entre las posiciones empresariales, al grado que sectores importantes de la facción radical del norte del país no aceptaron la invitación del gobierno delamadrista a la conciliación, de tal manera que su participación en el PAN continuaba apuntando a las elecciones de 1988. El surgimiento del neopanismo era la prueba del radicalismo que la participación activa de los empresarios como Clouthier y Canales Clariond inyectaban a ese partido. Por otra parte, la crisis interna del partido oficial reflejó las contradicciones del presidencialismo. La escisión de la corriente democrática que posteriormente se aliaría con las fuerza de izquierda y los partidos satélites para conformar el Frente Democrático Nacional en vísperas de las Elecciones de 1988. Y por último, el malestar de las clases medias y trabajadoras ante la política restrictiva que hacía caso omiso de los reclamos sociales.

Los empresarios y el discurso de sus organizaciones

Como se ha sugerido anteriormente los empresarios nacionales venían actuando en la política a partir de sus principales organizaciones empresariales, sin importar la condición legal de estas, es decir, que primero se requiere reconocer a las organizaciones que se constituyeron legalmente como "Organos de consulta para el Estado" y las organizaciones que se constituyeron, en diferente Contexto y normalmente ante un conflicto contra el Estado, por iniciativa empresarial. En el primer grupo tenemos a Concanaco, Concamin, y Canacindra, en el segundo, tenemos a la ABM, Coparmex, Amis, CMHN, y el CCE. [7] La importancia que tiene fijar la atención en las organizaciones empresariales tiene que ver con el significado de clase de estas entidades. Es a través de ellas que los empresarios actúan colectivamente en la política, sin que ello excluya la negociación individual ni la participación partidaria, simplemente que las organizaciones expresan sus posiciones políticas e ideológicas ante la realidad nacional. En el discurso de las organizaciones empresariales es posible apreciar el proyecto de nación que este sector intenta impulsar

como representante de una clase social, dentro de un sistema político en el que no existe un partido propiamente empresarial, por lo que sus demandas son expresadas por la vía extraparlamentaria, es decir, por medio de sus organizaciones. Pero estas agrupaciones tienen que ser vistas como grupos de presión y no sólo como grupos de interés como lo sugiere Camp. [8] El grupo de interés si bien es apropiado para hacer referencia a la organización empresarial, el concepto destaca más la cuestión de aglutinar en torno de un interés común; el grupo de presión implica la organización en torno a un interés común que se plantea el objetivo de actuar políticamente para que ese interés común predomine sobre el interés de otros grupos.

En ese sentido, es que presentamos el análisis del discurso de las principales organizaciones empresariales en el año de 1985 (Montesinos, 1990:7). Ahora, con el propósito de analizar el discurso desde la perspectiva de la cultura política empresarial que plasma en ese momento su alternativa a la coyuntura política, económica y social que el país vive en esos momentos. El discurso empresarial fue organizado en tablas de frecuencia [9] a partir de las cuales se apreciara la incidencia de las diferentes organizaciones empresariales en la prensa nacional, y por tanto en la opinión pública (Tabla 1). El segundo, aspecto apuntaba a identificar las variables en que el discurso se descompone (Tabla 2): Censura, demanda, ideológico- político, Gatt y economía (que hoy sería TLC y economía), apoyo y otros. Desde el discurso general de las organizaciones empresariales se puede apreciar como éstas estaban presionando al Estado a partir de censurar las medidas adoptadas por la élite política y demandar lo que ellos juzgaban pertinente en esos momentos, aunque su proyecto de nación ya avanzara bajo la dirección del estado. A los empresarios no sólo les preocupaba la implementación de las medidas, sino también los tiempos en que estas avanzaban. Otro comentario importante a la tabla de variables es lo concerniente a la presencia de la Canaco y Caintra, como dos discursos independientes a la Concanaco y Canacintra. Esto se debe a que en la coyuntura de 1985, la participación de las cámaras regionales del norte del país retomaron una presencia a nivel nacional. Ello refleja dos cuestiones: lo.) las contradicciones al interior de las organizaciones, donde la representación nacional no necesariamente representa los intereses de ese sector empresarial de igual forma para todas las regiones; 2o.) que las representaciones regionales Canaco y Caintra se muestran más radicalizadas que las representaciones nacionales, tradicionalmente consideradas como radicales como es el caso de Coparmex, obedeciendo más a su ubicación en el estado de Nuevo León donde se ubica el ala radical empresarial (Tabla 8; 3o.) no es posible definir las posiciones empresariales, solamente, a partir de la referencia "radical" y "moderada", las definiciones con que se quiere ubicar a una facción u organización empresarial se tendrán que definir en base a su posición adoptada en cada coyuntura política.

TEXTO

El paso siguiente es descomponer cada una de las variables en subvariables, para conocer de manera más específica lo que se censura, demanda, apoya etc. Respecto a la variable "Censura" (Tabla 3), encontramos que en el discurso general de las organizaciones empresariales la crítica privilegió la crisis económica y las medidas económicas y/o fiscales inadecuadas, así como también el control de precios, el proceso electoral, la expropiación de los predios urbanos, la intervención estatal en la economía y otras (centralización, declaraciones de funcionarios, etc.). Cabe destacar como el discurso de Coparmex dio mayor importancia a la cuestión de la crisis económica y al proceso electoral, así como el de Caintra y Canaco incidieron más en la crítica del proceso electoral dada la coyuntura electoral en el norte del país. Además de encontrar coincidencia en esa subvariable es importante identificar el predominio de los empresarios regiomontanos en esas organizaciones. El caso del CCE que centró su crítica en el

problema de la expropiación de los predios en el Distrito Federal, retomando la oportunidad para censurar la nacionalización de la banca.

Tabla 1

Tabla 2

Respecto a la variable "demanda" (Tabla 4) cabe destacar que las organizaciones empresariales delimitan aquí el campo del modelo económico que demandaban a la élite política implementara como proyecto de la nación. Las demandas empresariales dibujaron los rasgos del proyecto neoliberal que terminaría de aplicarse a profundidad en el sexenio de Salinas de Gortari. Queda demostrado, entonces, que los empresarios, a partir de sus diferentes instrumentos de presión donde evidentemente cuenta el económico, tuvieron la capacidad política de imponer un proyecto congruente con sus intereses de clase, específicamente con los económicos. En términos generales los empresarios nacionales demandaron en el año de 1985 austeridad y ajuste presupuestario, liberación de precios y el comercio, apoyo financiero y/o fiscal, reprivatización de la economía, salarios moderados e implementación de medidas económicas y/o fiscales. Es importante destacar como las demandas caen fundamentalmente en el rubro de la reprivatización de la economía, puesto que como ya habíamos visto, el recorte presupuestario y la política de tope salarial eran ya un hecho que se venía concretando, aunque no en los tiempos que requerían los empresarios.

En cuanto a la variable "ideológico-político" (Tabla 5) el discurso general de las organizaciones empresariales se dirigió a externar su posición sobre el papel de los empresarios, en llamar al consenso social, sobre la importancia de la democracia y la participación política, así como sobre lo negativo del marxismo y/o comunismo. Lo que llama la atención en esta variable del discurso empresarial como la Coparmex, CCE y Canacintra, Caintra y Canaco priorizan la importancia que tiene el papel del empresario. En este año se advierte como los empresarios además de tener una unidad ideológica toman conciencia de la importancia social que tiene su participación económica y política. Así como la necesidad de Concanaco y Concamin en hacer llamados al consenso social. La tijera se cerraba, mientras sus organizaciones generaban corrientes de opinión a partir de su presencia en la prensa, su presencia en la sociedad a partir de asociaciones civiles y su abierta participación en el PAN era ya muy respetable.

En la variable "Gatt y economía" (Tabla 6) el discurso empresarial apunta a la conveniencia de ingresar al Gatt, la negativa al ingreso, lo riesgoso del ingreso, opiniones sobre la deuda externa, el pronóstico de mayor crisis, información sobre la economía nacional e internacional. Lo curioso es ver como en este año las organizaciones empresariales todavía no se podían poner de acuerdo acerca de la conveniencia de incorporarse al Gatt. Para la Coparmex el tema ni siquiera fue blanco de atención; para el CCE no había la menor duda de la conveniencia de firmar el convenio, la Concanaco y la Caintra variaron su posición entre la conveniencia y lo riesgoso del convenio, la Canaco y la Concamin la variaron en las tres alternativas mientras que la Canacintra se pronunció por el no ingreso y lo riesgoso que éste podría resultar.

Tabla 3

Tabla 4

En la variable "apoyo" (Tabla 7) se puede advertir como las organizaciones empresariales apoyaban la incorporación de medidas que constantemente estaban demandando, se

trata de la austeridad y ajuste presupuestario, la reprivatización de la economía y medidas económicas.

La utilización del discurso de las organizaciones empresariales tiene que ser visto en el contexto del período histórico de la transición mexicana. En éste se plasman las aspiraciones de la burguesía nacional reflejando el quehacer político concreto del actor que la personifica: el empresario. En ese sentido, el discurso empresarial en 1985 funge como parteaguas en el cual se distingue una maduración política del sector empresarial en virtud del actuar global de sus organizaciones, y no sólo por el hecho de converger en el CCE (organismo al cual no pertenece la Canacintra). Por otra parte, sugiere, cuando menos, que el Estado incorporó las demandas empresariales en el proyecto económico de la nación, sino se quiere aceptar que los empresarios lograron imponer su proyecto al resto de la sociedad, que es la hipótesis que se quería destacar en la perspectiva de esta exposición.

La alianza continúa (Comentario final)

Pensar en el papel político de los empresarios en el año de 1988, es considerar la articulación de su práctica política al PAN, la iglesia católica, la política norteamericana y, sobre todo, en el papel que jugaron sus organizaciones en el escenario político nacional. Implica entonces comprender su maduración como actor social que demandó al Estado mexicano, a lo largo del período 1970-1990, la instalación de un proyecto de nación que la élite política comenzó a incorporar en el seno del Estado. Afirmar tajantemente que el proyecto neoliberal se instaló, exclusivamente, por la presión de los empresarios nacionales, sería dejar de reconocer las fisuras al interior del aparato burocrático que abrieron paso a la nueva élite política: la tecnocracia. Lo que resulta indiscutible es que los empresarios, como clase social, lograron que sus expectativas acerca del rumbo de la nación predominaran en la construcción del futuro colectivo. Es decir, que su concepción del presente así como la alternativa que ese sector planteó fueron aceptadas, en términos generales, por el conjunto de la sociedad mexicana. El proyecto de nación promulgado por los empresarios fue adoptado por los gobiernos de De la Madrid y Salinas de Gortari. La conclusión que esperamos se desprenda de este trabajo es que la parte sustancial en la legitimidad del proyecto de estos dos gobiernos, descansa en el respaldo de la burguesía nacional expresado en el apoyo brindado por los empresarios a partir de sus organizaciones empresariales.

Tabla 5

Tabla 6

Uno de los elementos sustanciales en poner fin al escepticismo de algunos sectores empresariales fueron los resultados de la campaña electoral de 1988. La sorpresa que dio la alianza de la izquierda en el FDN, que la colocó en el segundo lugar de importancia electoral, propicio un acercamiento más estrecho entre los dos actores pues la situación podría arriesgar el avance del proyecto instalado por la actual élite política: "El auge de la ideología neoliberal así como la emergencia de una tercera fuerza política representada por el movimiento cardenista, contribuyeron de manera importante a la unidad empresarial y a la despolitización de la facción liberal conservadora" (Luna, 1990: 15).

El acercamiento de los empresarios con el Estado se da en la medida que el proyecto neoliberal se va instalando en el país, su influencia en la toma de decisiones se observa desde la designación de Salinas de Gortari como candidato por el PRI a la presidencia, así como en las constantes invitaciones a los empresarios nacionales en la campaña

electoral de ese candidato, para participar en la elaboración del Programa de Gobierno 1988-1994 (Muñoz,1989:33).

La actual alianza entre los dos actores que venimos analizando se da en términos del repliegue de las organizaciones empresariales a una actividad de negociación económica con el Estado, como en el caso del inicio del sexenio de López Portillo en el que los empresarios consideraban adecuada a sus intereses la política económica del régimen; en el abandono casi total del Partido de Acción Nacional, al parecer la facción radical del norte del país ya pacto con el partido oficial, así lo sugieren los resultados de las elecciones estatales de 1991 donde el triunfo del PRI fue prácticamente abrumador, esto se hizo viable conforme avanzó la instalación del proyecto neoliberal; el interés de eminentes empresarios a participar electoralmente en representación del partido oficial, es el caso de Miguel Alemán Velasco (presidente de Televisa) candidato a la senaduría del estado de Veracruz en las elecciones de 1991; el virtual cambio del discurso empresarial, en comparación con el de 1985, en el que se ha modificado totalmente su estructura sustituyendo la "crítica" por el "apoyo" que es prácticamente total al nuevo régimen. Un ejemplo es la declaración del CCE en cuanto a que los resultados electorales de 1991, en los que el PRI resultó vencedor (con o sin fraude, que además a los empresarios ahora no les importa), ratificaban la confianza en las acciones del gobierno. [10]

Tabla 7

Tabla 8

La fortaleza de la alianza estará determinada por la continuidad en el proyecto económico neoliberal, la legitimación de éste está fincada en el respaldo empresarial. Como ha sido probado por los hechos concretos, mientras los intereses de los empresarios queden garantizados en el futuro inmediato, las demandas populares, que están más allá del pacto de solidaridad, pueden esperar un poco más. Esto es lo que, sin lugar a dudas, se puede observar en la transición mexicana que esperamos no haya concluido todavía.

CITAS:

[*] Se reconoce la colaboración de Griselda Martínez Vázquez por organizar la información, tanto en la elaboración como en el análisis del Discurso Empresarial. También se agradece a Gabriel Gaspar todos los comentarios al trabajo original.

[**] Profesor-Investigador Temporal del Departamento de Sociología, UAM-A.

[1] Un trabajo que expresa detalladamente la función económica y política de las empresas parastatales en México, en el período de industrialización impulsado desde principios de los 50's, es el de Benito Rey Romay "La ofensiva empresarial contra la intervención del estado" publicado por S. XXI, en el año de 1984.

[2] El trabajo de Millán deja claro que la influencia de la Camco determinó la creación del CCE, a la vez que esa misma organización posibilitó el liderazgo empresarial del Grupo Monterrey. Este planteamiento es compartido, entre otros autores por Tirado, Arreola y Basáñez.

[3] El populismo de Cárdenas y su política de nacionalizaciones provocó el enfrentamiento con algunos sectores del empresariado nacional. En ese caso el Grupo Monterrey fue el principal opositor de las políticas de Cárdenas, los famosos 14 puntos van dirigidos al enfrentamiento con este grupo. Por otra parte el populismo de López Mateos en el manejo

del libro gratuito y su apoyo a la Revolución Cubana provocó fuertes reacciones entre los empresarios mexicanos.

[4] Informe presidencial. 1o. de septiembre de 1977.

[5] Un elemento que comenzó a dar forma a la respuesta empresarial en torno al problema de la nacionalización de la banca, junto con la capacidad de respuesta del ala radical, fueron los foros regionales organizados en octubre de 1982 bajo el rubro de "México en libertad". Estos eventos tenían por objeto despertar la conciencia política en los sectores empresariales y, en general, en toda la ciudadanía.

[6] Poulantza, Nicos. "Poder político y clases sociales en el estado capitalista", S. XXI, México, 1988. En este trabajo el autor se refiere al concepto de autonomía relativa del estado, que se debe entender en dos sentidos: 1) la autonomía relativa del estado respecto a las relaciones económicas y 2) la autonomía relativa que tiene el estado en relación a la fracción hegemónica de la burguesía. Señala también que puede actuar en contra de esa fracción, si con ello garantiza los intereses del conjunto de la burguesía en el futuro. Aplicado al contexto mexicano que revisamos, la idea sirve para comprender como se afectan los intereses de la fracción financiera en favor de la nación, y por tanto, del conjunto de la burguesía nacional en el corto plazo.

[7] La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco) se fundó en el año de 1917 por iniciativa de ley, por lo que afiliación es obligatoria. La Confederación de Cámaras de la Industria (Concamin) se fundó en 1918 por iniciativa de ley, su afiliación es obligatoria. La Asociación de Banqueros de México (ABM) se fundó en 1928 por iniciativa de ley, su afiliación es obligatoria. La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) se fundó en 1929 por iniciativa de empresarios regiomontanos, su afiliación es voluntaria y se define como un sindicato patronal. La Cámara Nacional de la Industria (Canacintra) se fundó en 1941, su afiliación es obligatoria. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis) se fundó en 1946 por iniciativa de ley, la afiliación es obligatoria. El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) se fundó en 1962 por iniciativa empresarial, este organismo aglutinó en un principio a los treinta capitalistas más importantes de México. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se fundó en el año de 1975 por iniciativa empresarial, este organismo cúpula de cúpulas agrupa a la Concanaco, Concamin, Coparmex, ABM (que con la nacionalización fue sustituida por la Asociación Mexicana de Casas de México -AMCB-), Amis, CMHN y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Por ejemplo, para Dale Story las organizaciones empresariales mexicanas tienden a parecerse a las europeas, en su capacidad de influencia en la toma de decisiones. Con esto se reconoce la capacidad económica y política de los empresarios nacionales. Más que el comentario de Story, los hechos concretos demuestran el poder empresarial.

[8] Como Camp utiliza un método de análisis basado en entrevistas personales con miembros de las élites empresariales y políticas, llega a conclusiones por demás cuestionables. Por ejemplo, las referencias que este autor hace del CCE son realmente marginales, esto no es producto del olvido ni del descuido, sino de cifrar su confianza en lo que piensan individualmente grandes empresarios al calor de una entrevista. En el trabajo de este autor se encuentran referencias como las siguientes: "La exclusión de estos grupos (las organizaciones empresariales) hace que los empresarios vean su papel de modo enteramente diferente, creyendo que sus grupos de interés desempeñan un papel no político, en comparación con el papel de los grandes sindicatos" (P.. 164) Ni siquiera se molesta en cuestionar su concepto de "grupos de interés" para tratar a las organizaciones empresariales. Existen muchas afirmaciones como éstas, Muchas más peores como el párrafo de la p.. 167 en el que Camp confirma la superioridad de los

sindicatos en relación con las organizaciones empresariales. Si de alguna forma puede ser interesante este trabajo, es evidente que el autor no consideró el cambio en el escenario político mexicano, en el que prácticamente los trabajadores están borrados del mapa.

[9] Montesinos, Rafael. "El discurso empresarial en 1985", tesis profesional UAM-I, México, 1987. En este trabajo se plantea minuciosamente la metodología empleada para la organización del discurso empresarial en tablas de frecuencias. Se tomaron las declaraciones de las organizaciones empresariales registradas por el periódico La Jornada en el año de 1985, se elaboraron las tablas de frecuencia definiendo las variables del discurso, así como cada una de las subvariables. Al final se planteó la reconstrucción del discurso de la Coparmex considerando la lógica de las tablas de frecuencia.

[10] La Jornada, miércoles 28 de agosto de 1991.

BIBLIOGRAFIA:

Alonso, Jorge y Rodríguez, Manuel (1990) "La cultura política y el poder en México" en Cultura y política en América Latina, Zemelman (coord.), S.XXI, México.

Arriola, Carlos (1988). "Los empresarios y el estado 1970-1982", Unam-Porrúa, México.

Basáñez, Miguel (1990). "El pulso de los sexenios. 20 años de crisis en México", S. XXI, México.

Bolívar, Augusto (1990). "El período de la transición a la modernidad" en México en la década de los ochenta. La modernización en cifras, Garabito y Bolívar (coords.), UAM-A, México.

Camp, Roderic A. (1990). "Los empresarios y la política en México: una visión contemporánea", FCE, México.

Cordero, Salvador (1982). "Estado y burguesía en México en la década de 1970" en El estado mexicano, Alonso (coord.), CIESAS-Nueva Imagen, México.

Jacobo, Luna y Tirado (1989). "Empresarios, pacto político y coyuntura actual en México" en Estudios Políticos # 1. Nueva Epoca, Vol. 8.

Jarquín, Uriel y Cisneros, Isidro H. (1987). "Los empresarios, la crisis y la sucesión presidencial" en La sucesión presidencial en 1988, Nuncio (coord.), Grijalbo, México.

Luna, Matilde (1990). "Relaciones Estado-IP en los 90: ¿Hacia la consolidación?", en Meridiano 99, Vol II, Num. 19.

Millán, René (1988). "Los empresarios ante el estado y la sociedad", S.XXI, México.

Montesinos, Rafael (1990) "El discurso empresarial, 1985", ponencia presentada en el IV Encuentro Nacional de Investigadores sobre Empresarios y Empresas en México, COMECOSO-UNAM.

Muñoz, Víctor M. (1989). "Los empresarios y la sucesión presidencial de 1988: la posición frente al PRI", en Estudios Políticos # 1, Nueva Epoca, Vol.8.

Tirado, Ricardo (1990) "Los empresarios y la política. Presente y perspectivas", en el Cotidiano # 35.

Story, Dale (1990). "Industria, estado y política en México. Los empresarios y el poder", Conaculta-Grijalbo, México.

Zemelman, Hugo. (1989) "De la historia a la política. La experiencia de América Latina", S. XXI, México.

Zemelman, Hugo. (1990) "La cultura y el poder" en América latina, Hoy, González Casanova (coord.), S.XXI. México.